

Enero – abril 2002

Crisis económica, protesta social y “neoliberalismo armado” en América Latina¹



Por Emilio Taddei

■ La legitimidad perdida del neoliberalismo latinoamericano

El primer cuatrimestre del año 2002 aparece signado en la región por la repercusión regional e internacional de la crisis económica y del régimen político en la Argentina. El derrumbe del modelo neoliberal en dicho país –ejemplificado en el plano económico por la salida de la convertibilidad dólar/peso, la virtual cesación de pagos y la confiscación de los depósitos bancarios de los ahorristas– inaugura un nuevo ciclo de crisis económicas que desnudan con brutalidad los devastadores efectos sociales del liberalismo económico y que desestabilizan los propios regímenes democráticos.

Durante las precedentes crisis en la región (México en 1994 y Brasil en 1999) los efectos de las mismas pudieron ser parcialmente acotados gracias a la inyección masiva de préstamos del FMI resultante de la decisión política de los gobiernos de los países centrales (fundamentalmente de los Estados Unidos). El dinamismo de la economía internacional aún imperante en aquellos años (liderado por la “locomotora norteamericana”) facilitó el masivo salvataje de las dos mayores economías de la región, al igual que sucediera en Rusia, Turquía y el sudeste asiático, pero al precio de una profundización de las recetas neoliberales. Los efectos de las mis-

mas abrieron un nuevo ciclo de protestas sociales en América Latina (Seoane y Taddei, 2001) y asestaron un duro golpe a la legitimidad de las políticas neoliberales.

Desde finales de 2000 el contexto económico internacional mudó sustancialmente. El ingreso de la economía norteamericana en una fase recesiva (de la que aún no se ha recuperado), la perdurabilidad del estancamiento japonés y las dificultades de las economías de la Unión Europea son expresión de la desaceleración experimentada por la economía internacional. Esta pérdida del dinamismo capitalista –que cerró el ciclo de crecimiento irregular de la década de los noventa– se hizo sentir rápidamente en el conjunto de los países latinoamericanos. El año 2001 arrojó modestos o negativos índices de crecimiento en las economías de América Latina. La profundización de los planes de ajuste neoliberal como respuesta oficial a la crisis en numerosos países de la región ahondó las tensiones y favoreció el estallido de numerosos conflictos sociales. El sostenido crecimiento de los mismos durante los primeros nueve meses del año se vio momentáneamente afectado por la militarización internacional promovida por el gobierno norteamericano luego de los atentados del 11 de septiembre y la criminalización y represión de las protestas (Seoane, Taddei y Algranati, 2002). Sin embargo hacia finales de 2001 los conflictos recuperaron el dinamismo evidenciado anteriormente.

La debacle económica en Argentina se produce en un contexto internacional marcado por los efectos de la recesión y, en ese sentido, constituye una crisis de nuevo tipo que parece prefigurar –más allá de sus especificidades– los perfiles del debilitamiento estructural del neoliberalismo y la respuesta social en la mayoría de los países latinoamericanos. El notorio cambio de actitud del FMI y de los gobiernos de los países industrializados en el tratamiento de la situación argentina en relación a las crisis precedentes es una señal inequívoca de las mudanzas en el contexto mundial.

En América Latina las tendencias económicas recesivas se han agudizado desde inicios de este año, desnudando la enorme vulnerabilidad de las economías latinoamericanas luego de casi tres décadas de sostenidas políticas ortodoxas. La persistencia y profundización de las políticas de ajuste, privatización y concentración del ingreso practicadas por los gobiernos de la región como respuesta al agravamiento de la crisis provocan una creciente polarización social y política que se pone de manifiesto a través del incremento de los conflictos sociales del primer cuatrimestre del año 2002. Los registros de conflictos en el período enero-abril señalan un aumento del 29% en relación al cuatrimestre inmediatamente anterior (2.425 registros contra 1.868). La comparación del primer cuatrimestre de 2002 con el mismo período en el año 2001 arroja –utilizando idéntica metodología y fuentes de datos– un notorio incremento del 98% en el número de protestas consignadas por el OSAL.

En este marco de creciente polarización social, la respuesta oficial aparece de forma cada vez más recurrente signada por la profundización de la política represiva y de criminalización de los movimientos de protesta. La exacerbación de las crisis políticas en numerosos países de la región –Venezuela, Argentina y Paraguay son en este período los casos más destacados– combinada con el creciente tratamiento represivo de la cuestión social consolidan un modelo de dominación cada vez más

autoritario. Frente a la erosión de la hegemonía neoliberal, la legitimidad democrática de los regímenes políticos parece estar eclipsándose de forma alarmante en beneficio de una política basada en la ley de la fuerza, garante de la continuidad y efectividad de las políticas neoliberales, que algunos autores califican como de “neoliberalismo armado”.

La lucha contra el terrorismo –promovida por el gobierno norteamericano y utilizada de manera recurrente por numerosos gobiernos de la región para justificar la política represiva y la persecución de dirigentes sociales– surge como una pieza clave en la legitimación de la política represiva. La agudización de esta tendencia en el área andina –particularmente en Bolivia y Colombia– es una señal inequívoca de la creciente influencia de la política norteamericana en el tratamiento de los problemas políticos, sociales y económicos de la región. El intento de golpe de estado en Venezuela constituye un ejemplo inapelable de esta tendencia y pone de manifiesto la voluntad de los Estados Unidos de subordinar toda consideración democrática o de derechos humanos a sus intereses imperiales.

■ **Radicalidad, agregación sectorial y politización de las luchas sociales latinoamericanas**

La importante respuesta social frente a la profundización de la crisis evidencia la consolidación de algunas tendencias que caracterizan el ciclo de protesta social que se despliega en América Latina desde hace ya tres años. Muchos de los conflictos del período analizado se distinguen por un incremento en la radicalidad de sus formas y en su extensión temporal. Asimismo, es notorio destacar la proliferación de aquellos que cuestionan abiertamente las políticas económicas liberales y que parecieran evidenciar un incremento cualitativo de los niveles de politización del conflicto social. Así, un número significativo de este tipo de acciones presenta una creciente capacidad de agregación social: la convergencia en la lucha de diferentes secto-

res sociales (asalariados, campesinos, estudiantes, clases medias, etc.) afectados por los procesos de expropiación social y concentración del ingreso que genera el neoliberalismo. El caso argentino durante los meses de enero y febrero resulta –desde este punto de vista– quizás el más significativo del período, pero no el único. Otro elemento destacado es la presencia de conflictos que obtienen una respuesta satisfactoria a sus reivindicaciones como lo demuestra, por ejemplo, la decisión del gobierno boliviano de atender las reivindicaciones de los coccaleros de la región del Chapare en relación a la erradicación de los cultivos de coca. Si bien esta característica no puede generalizarse a todos los sectores y/o países, la misma pareciera estar ligada a la capacidad de articulación social y presión política desplegada. Por último, es preciso señalar una tendencia ya mencionada por el OSAL (Seoane, Taddei y Algranati, 2001) que evidencia la difusión geográfica de modalidades de protesta. El contagio del “cacerolazo” argentino a protestas en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Uruguay es el ejemplo más destacado de esta “contaminación” regional en las formas de lucha.

En el período que analizamos el aumento del contencioso social se distribuye con una mayor homogeneidad geográfica que en los cuatro meses precedentes, destacándose el aumento de las protestas en México y países centroamericanos (Nicaragua y Guatemala) como así también en la región andina, donde la importancia política de los las luchas se incrementa en Ecuador, Venezuela, Bolivia y Perú. Asimismo, la ruptura del proceso de paz en Colombia en el mes de febrero produjo un recrudescimiento de los conflictos armados en dicho país andino. En el Cono Sur sobresalen la masiva respuesta popular a la crisis del régimen económico y político en Argentina y las movilizaciones en Uruguay contra las privatizaciones y la política económica del gobierno.

Entre enero y abril de 2002 cabe destacar el incremento en la realización de huelgas nacionales y/o regionales y manifestaciones

contra las políticas económicas neoliberales y las privatizaciones. A mediados de febrero tuvo lugar en Ecuador un paro nacional multisectorial de 48 horas convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y organizaciones sociales y sindicales. Dicha protesta, que fue acompañada de bloqueos de carreteras y manifestaciones en Quito y otras ciudades, tuvo por objetivo el rechazo a las políticas promovidas por el gobierno. Los departamentos de la región sur del Perú también fueron escenario de un paro regional –con epicentro en Arequipa (ver artículo de Aníbal Quijano en la Región Andina)– de dos días convocado por el Frente Amplio Cívico contra la anunciada privatización de las centrales de producción energética EGASA y EGESUR. Bajo la consigna “Por un Uruguay sin excluidos”, la Propuesta Intersindical de los Trabajadores-Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) realizó a finales de enero una multitudinaria caravana a Punta del Este que fue acompañada por un paro nacional en reclamo de un cambio de política económica y el rechazo a la privatización de la compañía telefónica. En Colombia, el paro departamental en Boyacá del mes de febrero fue en protesta contra la política de privatizaciones del gobierno nacional. Por otra parte, la ofensiva privatizadora lanzada por el presidente González Macchi en Paraguay y el aumento tarifario ligado a la misma provoca múltiples acciones multisectoriales protagonizadas por trabajadores estatales con el apoyo de partidos políticos y organizaciones sociales nucleados en el Frente Nacional de Defensa de los Bienes Públicos. Durante el mes de enero trabajadores, sindicalistas y estudiantes universitarios salvadoreños realizan una marcha en San Salvador en protesta contra los miles de despidos y la política aplicada por el gobierno, exigiendo al mismo la apertura de mesas de negociación. En el marco de la crisis del régimen neoliberal argentino la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) convoca a mediados de enero a un paro nacional de 24 horas para exigir la libertad de dirigentes de esa central detenidos en la provincia de Neuquén.

La perdurabilidad y profundización del ajuste fiscal en la región explica el particular dinamismo de los reclamos de los asalariados del sector público, muchos de ellos de carácter nacional. Las luchas de la educación pública se incrementan en un 24% respecto al cuatrimestre anterior. Argentina (dos paros nacionales de 24 horas de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina –CTERA– por pago de bonos y sueldos atrasados), Bolivia (huelga general por tiempo indeterminado por aumento salarial) y Ecuador (paro nacional en rechazo al proyecto oficial de municipalización educativa) son los ejemplos más destacados. Diferentes acciones reivindicativas en reclamo de aumento del presupuesto educativo, reajustes salariales, por mejoras en las condiciones laborales, contra la privatización de la educación pública y en defensa de los estatutos docentes se suceden en Paraguay, Perú (huelga de hambre), Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, Brasil (Río de Janeiro), República Dominicana y Uruguay. En el ámbito universitario se destacan los paros por aumento salarial en México (UAM y UNAM), Bolivia y Colombia –donde los profesores universitarios protagonizan una huelga contra el proyecto de reforma legislativa que promueve la privatización de la educación pública. La resistencia a las privatizaciones de empresas públicas y el reclamo de salarios adeudados ilustran el notorio incremento (114%) de los conflictos protagonizados en diferentes países por los trabajadores de las empresas estatales. En el sector de la salud pública se registran a nivel nacional y municipal numerosos paros nacionales por aumentos salariales y de presupuesto para el área en Bolivia, Chile (asalariados municipales de la salud), Colombia, Ecuador (paro por tiempo indeterminado), Paraguay y Venezuela.

Las acciones de trabajadores desocupados se incrementan, en el período reseñado, en un 334% en relación al último cuatrimestre de 2001. Esta tendencia resulta particularmente del aumento de este tipo de luchas en la Argentina donde los diferentes movimientos “piqueteros” continúan desempeñando un papel

destacado en la dinámica social de dicho país. También en Chile (entrega de planes de empleo temporal), Perú, Panamá y Uruguay este tipo de acciones comienzan a manifestarse con cierta regularidad –aunque aún con menor impacto político que en la Argentina– y ponen de manifiesto la paulatina difusión regional de agrupaciones de trabajadores desocupados que revelan la importancia social y política que cobra la desocupación como consecuencia de la recesión económica y de las reformas estructurales del neoliberalismo.

El crecimiento de las protestas urbanas (14,44% en enero-abril 2002 contra 7,96% en septiembre-diciembre 2001) se focaliza en la Argentina, donde la dinámica abierta por la crisis del régimen económico y político alimenta las experiencias de autoorganización social –asambleas barriales– fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense (ver el artículo de José Seoane en el presente número). El rechazo a medidas económicas que promueven el aumento de impuestos y de las tarifas de servicios públicos también origina protestas urbanas en Guatemala y Uruguay. En Argentina, Panamá, Perú y Guatemala se destacan numerosas acciones multisectoriales contra la corrupción política asociada al modelo neoliberal que se prolongan a lo largo de todo el período analizado. Si en Argentina la generalización de los “escraches” revela la amplitud del repudio social a los políticos neoliberales, en Guatemala las manifestaciones multisectoriales desembocan en un pedido de renuncia del presidente Portillo.

■ Las múltiples facetas de la hegemonía norteamericana

El impulso cobrado por la política norteamericana en la región durante los cuatro últimos meses de 2001 se intensifican significativamente desde inicios del año. El involucramiento directo de las agencias oficiales norteamericanas en el frustrado golpe de estado en Venezuela contra el presidente Hugo Chávez (ver artículo de Edgardo Lander en el

presente número) denota un alarmante cambio de política en el tratamiento norteamericano de la “cuestión democrática” en el continente. Esta intervención política norteamericana en Venezuela se suma pues a las estrategias tendientes a consolidar los intereses de los Estados Unidos en la región: el despliegue militar (Plan Colombia y Plan Andino), la criminalización de las protestas sociales bajo el pretexto de la lucha antiterrorista, el renovado estímulo a las políticas de liberalización comercial en paralelo con el aumento de las políticas proteccionistas norteamericanas y, por último, el cambio de actitud –en relación a las turbulencias financieras precedentes– en el tratamiento de las crisis económicas en curso. La intransigencia manifestada frente a la crisis argentina –que amenaza con expandirse al conjunto de la región– pareciera ser una señal en dicho sentido.

El frustrado intento de golpe de estado en Venezuela es, junto con la crisis argentina, el hecho más relevante de la evolución política latinoamericana del cuatrimestre. La ruptura del orden constitucional perpetrada por representantes de la “Triple Alianza” (empresarios, Iglesia y militares) tuvo –entre sus objetivos principales– la privatización en beneficio de intereses transnacionales de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) con el propósito de poner fin a la política petrolera autónoma del gobierno del presidente Chávez (ver artículo de Luis Lander y Margarita López Maya en la sección Análisis de casos). La actitud complaciente de Washington frente a la violación de las reglas constitucionales resulta una clara muestra del papel estratégico que ocupa el control de los recursos energéticos y naturales en la política exterior norteamericana en la región. Las otrora “incuestionables cláusulas democráticas” que guiaron las relaciones de los gobiernos norteamericanos con la región durante la década de los noventa parecen diluirse en beneficio de una nueva política hemisférica despojada de todo prurito democrático. La reposición del orden constitucional –lograda gracias a la masiva movilización popular– constituye una inapelable demostración

del rechazo que genera en vastos sectores sociales esta nueva política de *big stick* promovida por el presidente George Bush Jr.

La ruptura por parte del gobierno colombiano del proceso de paz con la guerrilla de la FARC en febrero produce un inmediato recrudescimiento de los enfrentamientos armados en el contexto de la campaña presidencial en Colombia y una creciente militarización del país. Las declaraciones del presidente Pastrana, que califica a las FARC como grupo terrorista, anteceden en pocos días a la visita de Bush a dicho país y al Perú. Este simbólico viaje presidencial se acompaña con la presentación de un proyecto de ley en el congreso de Estados Unidos para levantar las restricciones de la ayuda militar norteamericana a través del Plan Colombia a los efectos de destinar dicha ayuda a la lucha contrainsurgente. En tanto, las acciones militares desarrolladas en el marco del Plan Tácticos producen un incremento de los desplazamientos de poblaciones indígenas y campesinas hacia las regiones fronterizas con Ecuador y Venezuela.

El proceso de criminalización de la protesta y de líderes sociales cobra particular relevancia en Bolivia con la ruptura del diálogo –a partir de enero– entre el gobierno y los cocaleros de la región del Chapare y los Yungas. La prolongada lucha de los campesinos contra la política de erradicación de cultivos de coca promovida por los Estados Unidos adquiere un particular dramatismo en los meses de enero y febrero en los que las fuerzas represivas asesinan a militantes campesinos, arrestan a más de cincuenta dirigentes cocaleros y reprimen, en la ciudad de Cochabamba, una marcha multisectorial en la que confluyen –en apoyo a la lucha de los pequeños productores de coca– las Federaciones de Trabajadores Fabriles, de Maestros Urbanos y Rurales, de Trabajadores de la Salud, la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUCTB) y la Coordinadora del Agua, entre otras muchas organizaciones. La legitimidad social de la lucha cocalera y la significativa presión polí-

tica de la misma obligan al gobierno a dejar sin efecto la aplicación de los decretos de erradicación de la coca y a anular el proceso de desafuero parlamentario del dirigente cocalero y diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales, acusado por los organismos de inteligencia de desarrollar actividades terroristas.

La intensificación de la represión se generaliza a otros países y parece afectar de manera particular –aunque no exclusiva– las luchas campesinas e indígenas por la tierra, y contra la destrucción y/o privatización de recursos naturales comunitarios. En Chile, la lucha contra la construcción de la central hidroeléctrica de ENDESA en Ralco protagonizada por las poblaciones mapuches y pehuenches se caracteriza –como ya señaláramos en otras ocasiones– por un creciente endurecimiento de la posición del gobierno que continúa y profundiza la represión y encarcela a dirigentes autóctonos de la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco.

En México, el hostigamiento a las comunidades zapatistas de Chiapas genera movilizaciones de denuncia contra la presencia militar en la región y las agresiones y amenazas por parte de grupos priístas en la zona norte de la Selva Lacandona. El proyecto gubernamental de construcción de un nuevo aeropuerto en la localidad de Texcoco, en las cercanías de la ciudad de México, produce un vasto proceso de movilización de ejidatarios contra la expropiación de sus tierras destinadas a albergar las instalaciones de la terminal aérea. Asimismo, en Veracruz el Movimiento de los 400 Pueblos realiza acciones exigiendo la entrega de cinco mil hectáreas de tierras para campesinos de esa región.

La movilización campesina ocupa un lugar destacado en la protesta social en Paraguay. Las ocupaciones de tierras en el Chaco paraguayo van acompañadas de una violenta represión seguida de desalojos que arrojan numerosos heridos y detenidos. Durante el mes de marzo la Federación Nacional Campesina, apoyada por otras organizaciones sociales y

políticas, realiza una marcha hasta Asunción para pronunciarse en defensa de la banca pública, contra la privatización de los entes estatales –exigida por el FMI–, por la industrialización de los productos agrícolas y por el derecho a la tierra y a la educación pública. Durante el mismo mes, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) realiza su plenaria nacional y resuelve continuar la lucha contra el neoliberalismo, el terrorismo de Estado, por mayor presupuesto para salud, educación, caminos y electrificación rural. En Brasil, el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra protagoniza también acciones de ocupación de tierra, particularmente en propiedades de la familia del presidente Fernando Henrique Cardoso.

Las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana en Ecuador fueron el escenario de un prolongado paro regional multisectorial de once días en reclamo de la emergencia del sector agrícola en la región. La activa participación de diferentes comunidades indígenas y campesinas en el corte de carreteras y acceso a campos petroleros se enfrentó con la violenta represión policial que causó la muerte de cuatro personas y numerosos detenidos en el marco del estado de emergencia decretado por el presidente Gustavo Noboa. En conmemoración del Día Internacional de la Lucha Campesina, en el mes de abril, la Coordinadora Nacional de Tierras (CONTIERRA) de Guatemala realiza ocupaciones de fincas en demanda de la reforma agraria y del cumplimiento de los acuerdos de paz por parte del gobierno.

El anuncio de medidas proteccionistas realizado por el gobierno norteamericano durante el período analizado –que afecta a numerosos productores rurales de la región– se combina con una notable aceleración de iniciativas que promueven la firma de tratados de libre comercio (TLC) o a la apertura de negociaciones en este sentido. La generalización de TLCs se inscribe en el marco del proceso de negociaciones comerciales a escala continental tendientes a la concreción del ALCA impulsado por los gobiernos de Esta-

dos Unidos y Canadá. A los acuerdos y/o negociaciones ya reseñados en el período inmediatamente posterior al 11 de septiembre (Seoane, Taddei y Algranati, 2002) es preciso agregar la iniciativa de arancel externo común acordado en enero por los cinco países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN, integrada por Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela) que regirá a partir de enero de 2004. Costa Rica firma con República Dominicana una carta de entendimiento en la que se ratifican los instrumentos del TLC firmado en 1998, al mismo tiempo que comienza a regir el TLC entre Chile y el país centroamericano. Asimismo, el senado chileno aprueba los protocolos para dar vía libre al TLC entre el país andino y El Salvador. Este último país firma con Panamá un TLC bilateral en el mes de marzo. En el mes de febrero los ministros de economía de Centroamérica comienzan en Nicaragua el proceso de elaboración de una propuesta de TLC con Estados Unidos, a pesar de la advertencia del Departamento de Estado a Centroamérica de que será difícil negociar en este tratado el acceso de productos de esa región al país norteamericano y la reducción de los subsidios agrícolas. El Parlamento Europeo a su vez impulsa la moción española de negociar un TLC con Centroamérica. Durante el mes de abril se inicia en Ottawa la tercera ronda de negociaciones para establecer un TLC entre Canadá y Centroamérica.

En el marco de la recesión económica y de la caída de los precios de numerosos productos agrícolas, los efectos de la desregulación comercial se hacen sentir de manera significativa entre los pequeños propietarios rurales de varios países de la región. Las protestas de los productores de leche de Cochabamba (Bolivia) y de Chile, los arrozeros de Costa Rica, los azucareros de Nicaragua y los maiceros y arrozeros del Ecuador denuncian los perjuicios provocados por las políticas agrícolas vigentes. En Guatemala, Perú y Uruguay también se registran numerosos conflictos que exigen soluciones para este sector. En México, la Federación Nacional de Productores de Arroz exige la revisión del capítulo agropecuario del NAFTA mientras

que se registran, a lo largo de todo el período, protestas de productores agropecuarios en demanda de la reducción de las tarifas eléctricas.

El rechazo a los proyectos hegemónicos dinamiza los procesos de convergencia regional de diferentes movimientos populares latinoamericanos, como lo expresa la realización del Encuentro Campesino Mesoamericano realizado en Tapachula, México, con el objetivo de discutir el impacto de las políticas agrícolas excluyentes, los tratados comerciales y fundamentalmente el impacto del Plan Puebla Panamá. El segundo Foro Social Mundial reunido en febrero en Porto Alegre fue el marco para la realización de una nueva reunión continental de movimientos sociales opuestos al ALCA con el objetivo de dinamizar la campaña regional a desarrollarse contra este proyecto durante el año 2002.

■ **Criminalización, desestabilización política y “neoliberalismo armado”**

El repaso de los conflictos sociales del cuatrimestre enero-abril del presente año arroja un alarmante incremento de muertos, acciones represivas, secuestros y detenciones de líderes sociales y manifestantes. En Bolivia, Colombia, República Dominicana, Nicaragua y Ecuador numerosas personas fueron muertas por las fuerzas represivas. En este último país, un estudiante murió durante las manifestaciones estudiantiles reprimidas por la policía en la ciudad de Cuenca y otras cuatro personas perdieron la vida durante el conflicto reseñado en la amazonia ecuatoriana. En Paraguay una multitudinaria manifestación organizada bajo la consigna “No al terrorismo de Estado” puso de manifiesto la amplitud del repudio a la detención ilegal y posterior tortura de dos militantes del Movimiento Patria Libre. Argentina, Perú, Chile y El Salvador se agregan a la lista de países donde se incrementan los actos represivos contra manifestantes y las detenciones de líderes comunitarios y sociales.

La progresiva ilegitimidad social de la “governabilidad neoliberal” resulta del aumento del descontento social que cuestiona de forma creciente “la ley de hierro del ajuste” como única respuesta oficial frente a la crisis económica. La preocupante generalización de la represión en la región parece hablar de una nueva fase política caracterizada por la violación –desde la propia esfera del Estado– de los derechos humanos y democráticos, practicada bajo el manto discursivo de la lucha contra el terrorismo. Frente a las tensiones sociales y políticas derivadas de la crisis, el “neoliberalismo armado” aparece como la respuesta del poder constituido frente a las demandas populares de democracia y justicia social. Esta política autoritaria encuentra, sin embargo, importantes resistencias en los vastos procesos de convergencia social antineoliberal reseñados anteriormente.

Esto quedó de manifiesto en ocasión de dos encuentros internacionales que tuvieron lugar en países latinoamericanos en el período analizado: el II Foro Social Mundial (Porto Alegre, Brasil) y la Contracumbre de los movimientos sociales en paralelo a la Cumbre del Desarrollo de la ONU (Monterrey, México, en el mes de marzo). La masividad del II FSM, realizado a comienzos de febrero, fue una renovada y contundente muestra de la vitalidad de los diferentes movimientos sociales latinoamericanos e internacionales contra el neoliberalismo. El “Foro por un mundo sin guerras”, realizado con el auspicio de CLACSO en el marco de este encuentro internacional, fue una clara muestra del compromiso con la paz y del rechazo del movimiento por otra mundialización a la militarización de las relaciones internacionales promovida por los poderes neoliberales. Tal cual lo postula el documento aprobado en este foro “un mundo con guerras ha sido el mundo del dominio de la búsqueda ilimitada de lucros, de la explotación desenfrenada de los recursos naturales, de la superexplotación de los trabajadores, del uso de la tecnología para acumular más riquezas y no para la conquista del bienestar de la humanidad” (Manifiesto por un mundo sin guerras, 2002). Asi-

mismo, el plenario de movimientos sociales realizado en el marco del II FSM –que contó con una importante presencia de delegados latinoamericanos y caribeños– renovó su compromiso contra la guerra y la represión y con las diferentes luchas sociales y políticas tendientes a revertir el cercenamiento creciente de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales promovidos por el “neoliberalismo armado”.

■ Bibliografía

Seoane, José y Taddei, Emilio 2001 “De Seattle a Porto Alegre. Pasado, presente y futuro del movimiento anti-mundialización neoliberal”, en Seoane, José y Taddei, Emilio *Resistencias mundiales. De Seattle a Porto Alegre* (Buenos Aires: CLACSO).

Seoane, José, Taddei, Emilio y Algranati, Clara 2002 “Tras el 11 de septiembre. Conflicto social y hegemonía norteamericana en América Latina”, en *OSAL* (Buenos Aires), N° 6, Enero.

Seoane, José, Taddei, Emilio y Algranati, Clara 2001 “Neoliberalismo, crisis y resistencias sociales en América Latina: las configuraciones de la protesta”, en *OSAL* (Buenos Aires), N° 5, Septiembre.

Manifiesto por un mundo sin guerras 2002 en *Porto Alegre. Globalizar la esperanza* (Santiago: Editorial Aùn creemos en los sueños).

■ Nota

1 El autor agradece las sugerencias y comentarios realizados por Clara Algranati, Atilio Boron, Ivana Brighenti y José Seoane.